

Nuestros cooperadores en Colombia:

La **Comisión de Justicia y Paz** es un organismo colombiano que obra hace 15 años en la promoción y en la protección de los derechos de la persona. Sus integrantes acompañan las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó en su búsqueda de verdad, de justicia, y de reparación integral. Aparte la protección legal y las denuncias, el acompañamiento que hace Justicia y Paz incluye una presencia permanente en las Zonas Humanitarias que permite el establecimiento de relaciones en confianza y el fomento de un entendimiento mutuo. Contando con talleres de educación popular y con cursos de alfabetización, Justicia y Paz realiza también un trabajo social de intervención psicológica para los adultos, jóvenes y niños de las comunidades, así como para las familias de las víctimas con traumatismos generados por las incursiones, las desapariciones y los asesinatos.

La **Red de Hermandad y Solidaridad Colombia** es una red creada en 1994, compuesta por la Red Colombia (organizaciones y procesos comunitarios) y la Red Europa (agrupaciones de bases y sindicatos), así como por algunos organismos norteamericanos. La Redher quiere contribuir a la lucha contra la impunidad y a la defensa de los derechos humanos, creando vínculos entre las organizaciones sociales colombianas e internacionales para fortalecer los procesos de acompañamiento internacional ante las organizaciones sociales colombianas y sus problemáticas concretas, con el fin de consolidar la solidaridad política. La Redher consta de varios niveles de acción: el Tribunal Permanente de los pueblos contra las firmas transnacionales (TPP), el Tribunal Internacional de Opinión (TIO), la Escuela Nacional Agrícola, el boicót de Coca Cola y la campaña contra otras multinacionales, el apoyo a los procesos de resistencia y a los planes de vida de las comunidades en resistencia -particularmente mediante el acompañamiento internacional-, las denuncias internacionales y las presiones a las autoridades.

El Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia - PASC - es una organización independiente con sede en Montreal que, mediante la difusión de información y el acompañamiento internacional, trabaja para crear una red de solidaridad directa con comunidades campesinas en resistencia civil.

Nuestras acciones

- × Difusión de información, sensibilización y educación popular concerniendo la situación de las luchas campesinas en Colombia, y denuncia de los intereses detras de las violaciones de derechos humanos.
- × Acompañamiento internacional en las poblaciones de las comunidades. La presencia física internacional sobre el terreno representa un apoyo importante para las comunidades que defienden sus derechos en calidad de población civil viviendo en el seno de un conflicto armado. El PASC intenta concretizar la solidaridad directa, lo cual implica un apoyo político al proceso de resistencia civil de las comunidades por el derecho a la vida, al territorio y la autodeterminación.
- × Acciones urgentes y presiones políticas sobre las autoridades colombianas y canadienses en reacción contra las agresiones militares hacia las comunidades y con el fin de apoyar sus reivindicaciones.

Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia



www.pasc.ca

info@pasc.ca

514-966-8421

Terrorismo de Estado e intereses económicos

Con el pretexto de luchar contra los movimientos de insurgencia armada de izquierda y contra los narcotraficantes, el Estado colombiano despliega, desde el principio de la década de 1960, efectivos militares y paramilitares que violan sistemáticamente los derechos humanos en total impunidad. La militarización ha sido siempre el medio privilegiado por los gobiernos con el fin de solucionar un conflicto, no obstante provocado por las desigualdades sociales y políticas, lo que no ha cesado de alimentar el círculo vicioso de la violencia estructural. Oficiosamente, la represión estatal y paraestatal tiene por objetivo acallar toda protesta social en completa impunidad; el objetivo es controlar militarmente la totalidad del país e imponer un modelo económico único, vinculado a los intereses privados de una minoría. En la época del neocolonialismo, los megaproyectos económicos son presentados como ejemplos de desarrollo y de modernización que permiten reducir la pobreza, y sin embargo, los hechos demuestran que se trata de una nueva forma de esclavitud. En este sentido, la nueva ofensiva es la "desmovilización" impune de los paramilitares, que niega así el derecho de verdad y de justicia de las víctimas y que de hecho legaliza la contrarreforma agraria de los últimos años.

Megaproyecto agroindustrial de palma africana

La militarización va de la mano con la imposición de megaproyectos económicos. Gracias al control de diferentes zonas estratégicas por el ejército nacional y por los paramilitares, las compañías pueden tener acceso al territorio para allí desarrollar sus actividades. A título de ejemplo, podemos mencionar la tala forestal intensiva, la explotación minera a cielo abierto, los megaproyectos agroindustriales, de ganadería o de infraestructuras. Existe literalmente una contrarreforma agraria que opera con el fin de desterrar a los campesinos para tomar el control de sus tierras y dejarlas en manos de inversionistas privados. Este proceso afecta gravemente el modo de vida ancestral de las comunidades, tanto como a la agricultura tradicional de subsistencia que éstas practican y que permite su autonomía alimentaria. Igualmente, los impactos ambientales generados por el desarrollo de megaproyectos agroindustriales y de infraestructuras son desastrosos para esta región, situada en el corazón de una región de selva tropical húmeda extremadamente rica en biodiversidad.



Uno de los sectores que saca provecho de los desplazamientos forzados es el de producción de aceite de palma presentemente implantado ilegalmente sobre miles de hectáreas en el corazón de los territorios colectivos de las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó. Además, las plantaciones de palma ponen en peligro el ecosistema de una de las regiones más exuberantes en biodiversidad del planeta. La deforestación precede siempre el establecimiento de las plantaciones de palma africana, monocultivo extensivo destinado a la exportación, empobreciendo radicalmente los suelos. Según un reporte del instituto colombiano de desarrollo rural (INCODER) de marzo del 2005, el 93% de las plantaciones de palma son ilegales. Es más, lo que es bastante inquietante es el viraje brusco tomado por el gobierno colombiano que, 7 meses más tarde, afirma a través del ministerio de agricultura que cerca de 15000 hectáreas están situadas dentro de los límites de "propiedades individuales privadas" que pertenecen a las empresas palmicultoras.

Desplazamiento y resistencia

Las comunidades afro descendientes del Jiguamiandó y del Curvaradó, del departamento del Chocó al noroeste del país, han sufrido un desplazamiento forzado en 1997. A comienzos del año 2000, después de haber vivido en campamentos en varias poblaciones, estas comunidades decidieron regresar a vivir en su territorio ancestral y lograron obtener un título de propiedad colectiva. En el 2004, éstas crearon 3 Zonas Humanitarias, situadas en la cuenca del río Jiguamiandó, dentro de las cuales éstas se reafirman como poblaciones civiles. De hecho se trata de una estrategia de protección y diferenciación dentro del conflicto armado basada en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las comunidades deben enfrentar continuamente nuevas amenazas, como montajes judiciales y agresiones (para) militares, además de presiones y falsas promesas del Estado para que se asocien a las compañías palmicultoras, mientras que la palma continúa avanzando sobre sus tierras. En abril del 2006, una nueva Zona Humanitaria fue creada, esta vez en la cuenca del Curvaradó, cuyos habitantes, oriundos del Curvaradó, se encontraban dispersos en diferentes poblaciones de la región. Está ubicada en el medio de las plantaciones de palma africana, donde la presencia de la policía, del ejército y de los paramilitares es fuerte. Una segunda Zona Humanitaria, El Tesoro, fue creada en octubre del mismo año. Además, los habitantes han decidido crear Zonas de reserva natural y de biodiversidad, que sirven primordialmente como espacios para cultivar productos agrícolas de subsistencia y para preservar ciertas áreas de la selva tropical. Pero antes que todo, la creación de varias Zonas de reserva y de dos Zonas Humanitarias en el Curvaradó significa para los campesinos una nueva etapa de resistencia para la protección de su territorio: de la etapa defensiva que consiste en la autoprotección contra las incursiones armadas y en la denuncia constante del robo de sus tierras, pasaron a la etapa ofensiva que estriba en la recuperación directa de su territorio.